

# REPÚBLICA DE COLOMBIA



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020)

### Auto Interlocutorio

#### MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2019-01049-00
EJECUTANTE:	JOHN EDWIN GARCES GARCIA Apoderado: José Eusebio Moreno <a href="mailto:asojuridicamoreno@hotmail.com">asojuridicamoreno@hotmail.com</a> <a href="mailto:asojuridicamoreno@gmail.com">asojuridicamoreno@gmail.com</a>
EJECUTADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – JUSTICIA PENAL MILITAR – EJÉRCITO NACIONAL
ASUNTO	LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO

#### OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a decidir sí existe mérito o no para librar mandamiento de pago en contra Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en virtud de la demanda ejecutiva presentada por el señor JOHN EDWIN GARCES GARCIA, quien actúa a través de apoderado judicial debidamente constituido.

#### I. PUBLICIDAD.

Por Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 se levantó la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020.

Se informa a las partes que las actuaciones procesales subsiguientes en este proceso se surtirán conforme a lo dispuesto por el **Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020**. En el aplicativo SAMAI se llevará el expediente digital.

Para los efectos del artículo 2 del decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co). De celebrarse alguna audiencia se hará a través de la plataforma TEAMS.

Las partes informarán el canal digital elegido para surtir las actuaciones y notificaciones del presente proceso conforme ordena el artículo 3 del decreto 806.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

**En su defecto se tomarán como tales los correos electrónicos que obran en el proceso y en el SIRNA.**

**II. IMPULSO.**

**ANTECEDENTES**

Se pretende el cobro ejecutivo de: **i)** La sentencia No. 711 del 27 de enero de 2015<sup>1</sup> proferida por la sala de descongestión de esta corporación, **ii)** la audiencia de conciliación celebrada el 15 de abril de 2016<sup>2</sup>, y **iii)** el auto interlocutorio No. 011 del 28 de abril de 2016 mediante el cual se aprobó el acuerdo conciliatorio<sup>3</sup>, en el siguiente sentido:

**“PRIMERO: APRUÉBASE** el acuerdo conciliatorio total logrado entre el apoderado judicial de la parte actora y la apoderada de la entidad demandada Justicia Penal Militar, en audiencia de conciliación, celebrada el día 15 de abril de 2016.

**SEGUNDO:** En consecuencia de lo anterior, la Justicia Penal Militar deberá pagar conforme a lo acordado y establecido en la sentencia No. 711 del 27 de enero de 2015, para el demandante el 80% del valor total de la condena impuesta a favor de cada uno por concepto de perjuicio moral y lucro cesante de lo establecido en la sentencia, valores que para el demandante quedarán estipulados así:

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONDENA IMPUESTA PERJUICIOS MORALES</b>	<b>OFRECIMIENTO EN PORCENTAJE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
JOHN EDWIN GARCÉS GARCÍA (afectado)	70 SMLMV	80 %	56 SMLMV
<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONDENA IMPUESTA POR LUCRO CESANTE</b>	<b>OFRECIMIENTO EN PORCENTAJE DE LA JUSTICIA OPENAL MILITAR</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
JOHN EDWIN GARCÉS GARCÍA (afectado)	\$ 12.337.851	80 %	\$ 9.870.280,8

(...)

La decisión anterior quedó debidamente ejecutoriada el 13 de mayo de 2016, tal como consta en la constancia expedida por esta Corporación, visible a folio 26 vuelto.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

III. CONSIDERACIONES

1. Marco normativo aplicable.

La finalidad del proceso ejecutivo es el cumplimiento forzado de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título ejecutivo.

El artículo 422 del Código General del Proceso establece:

**“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles** que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.” (Negrilla y subraya de la Sala)

El título ejecutivo debe reunir condiciones formales y de fondo. Las primeras se refieren a que el título ejecutivo base de recaudo emanen del deudor o de su causante y sean plena prueba en su contra, o de una providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley. Las segundas, a que el título contenga una "obligación clara, expresa y exigible", líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero.

La doctrina enseña que por **expresa** debe entenderse que aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones. "Faltaría este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta."<sup>3</sup>

La obligación es **clara** cuando además de expresa, aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

La obligación es **exigible** cuando no está pendiente un plazo o condición<sup>4,5</sup>.



### TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

El título ejecutivo, en materia contencioso administrativa se encuentra determinado en el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece:

*“ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:*

- 1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.*
- 2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.*
- 3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.*
- 4. Las copias auténticas de **los actos administrativos** con constancia de ejecutoria, **en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.** La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.”(Negrilla y subraya fuera del texto).*

Es de aclarar que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha entendido que en los asuntos donde se pretende el cumplimiento de decisiones judiciales a través del proceso ejecutivo, el título que presta mérito no es de los denominados “complejos”<sup>10</sup>; puesto que solo se requiere copia de la providencia ejecutoriada con la que se reconoció y ordenó el pago de una suma de dinero, ya que es esta la que contiene la obligación expresa, clara y exigible<sup>11</sup>.

Así mismo, se determinó que exigir la copia auténtica del acto administrativo que dio cumplimiento al fallo judicial a ejecutar, se constituye en un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”<sup>12</sup>

Entre tanto, en lo que refiere a la forma en que se deben aportar las providencias que contienen la obligación a ejecutar, es preciso indicar que el artículo 114 del Código General del Proceso dispone:



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

***“Artículo 114. Copias de actuaciones judiciales. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:***

***(...)***

***2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria... (Negrillas por fuera de texto)***

El Consejo de Estado, en sede de tutela indicó que *“el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, antes citado, no exige que el mencionado documento deba estar en original. En efecto, la norma se limita a señalar que constituyen título ejecutivo “las sentencias debidamente ejecutoriadas (...)”, además, “el artículo 244 del Código General del Proceso, establece que “(...) los documentos públicos o privados emanados de las partes o terceros, en original o copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos (...)”. Así mismo, dispone que (...)” se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo”*.<sup>13</sup>

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo, pues si bien el artículo 298 se titula “procedimiento”, lo cierto es que en dicho precepto normativo se impone al juez el deber de hacer cumplir las obligaciones contenidas en determinados títulos ejecutivos, mas no se refiere a un genuino procedimiento de ejecución.

Sin embargo, la misma normatividad en su artículo 306 señaló que, en aquellos aspectos no contemplados en el código, se seguiría el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), en el cual de manera expresa se encuentra el trámite del proceso ejecutivo.

Así las cosas, se tiene que los procesos ejecutivos administrativos, hoy en día, se deben tramitar íntegramente por las reglas del proceso ejecutivo de que trata el artículo 422 y siguientes de la Ley 1564 de 2012<sup>14,18</sup>:

De otra parte:

El numeral 9° del artículo 156 del CPACA consagra: *“En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva”*. Por tanto, este Despacho es competente para conocer de la demanda ejecutiva, toda vez que profirió la



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

sentencia de primera instancia, realizó la audiencia de conciliación y el auto que aprobó la misma.

La Ley 1437 de 2011, que regula lo referente a los requisitos de la demanda, establece dentro de su artículo 164 literal k), estableció que la demanda ejecutiva debe presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida. En el presente asunto se cumplió el precepto toda vez que el auto interlocutorio No. 011 de fecha 28 de abril de 2016<sup>21</sup>, que aprobó la conciliación y que sirve como base del recaudo ejecutivo, quedó ejecutoriado el 13 de mayo de 2016 y la demanda ejecutiva se presentó el 19 de noviembre de 2019<sup>22</sup>, es decir, dentro de los cinco (5) años de que trata la norma en cita.

### 2. ANALISIS DEL CASO CONCRETO.

En el caso concreto el título que se pretende ejecutar es simple toda vez que se encuentra conformado por el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio, el cual quedó ejecutoriado el 13 de mayo de 2016, según constancia secretarial que obra a folio 26 vuelto.

La obligación es **EXPRESA** pues se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa. La sentencia judicial condenó a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – JUSTICIA PENAL MILITAR – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar unas sumas de dinero a favor del ejecutante por concepto de perjuicios morales y materiales (lucro cesante); así mismo celebrada la audiencia de conciliación se logró acuerdo conciliatorio que fue aprobado mediante auto interlocutorio No. 011 del 28 abril de 2016; así como se dispuso el cumplimiento de la obligación de conformidad con lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

Es **CLARA**, pues sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.

Es **EXIGIBLE** pues no depende del cumplimiento de un plazo o condición toda vez que el auto que aprobó la conciliación quedó ejecutoriado el 13 de mayo de 2016, la parte ejecutante solicitó el pago de la misma el 16 de junio de 2016 y como quiera que no se efectuó el pago de la obligación en ella contenida, se hace exigible.

Finalmente, la obligación se encuentra determinada en el auto que aprobó la conciliación, la parte ejecutante acreditó estar legitimada en la causa por activa, se



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

tiene certeza que el deudor es la Nación – Ministerio de Defensa – Justicia Penal Militar – Ejército Nacional y transcurrió el plazo fijado en el artículo 177 del CCA, para el cumplimiento de la misma, sin que se haya realizado el pago.

Ahora, en cuanto a los intereses moratorios se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 177 del CCA, de conformidad con los criterios que a continuación se señalan:

- Las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia devengarán intereses comerciales y moratorios.
- Cumplidos seis (06) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

En el presente asunto, el día 16 de junio de 2016 se presentó la solicitud de cumplimiento del fallo judicial objeto de ejecución, radicada ante la entidad accionada, es decir, dentro del término de los seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del auto que aprobó el acuerdo conciliatorio (13 de mayo de 2016). Por tanto, en este caso no cesaron los intereses corrientes y moratorios.

Por lo anterior y una vez estudiada la presente demanda ejecutiva por el despacho, se evidencia que esta reúne los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes del CGP y contiene título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem.

En consecuencia, el despacho dando cumplimiento al artículo 430 del CGP por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011,

**R E S U E L V E**

**PRIMERO: APLICAR al proceso el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020. En el aplicativo SAMAI se llevará el expediente digital.** Para los efectos del artículo 2 del decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co). **Los memoriales se subirán directamente a SAMAI o se remitirán por correo pero se identificarán por ponente, partes, radicado completo y asunto.** De celebrarse alguna audiencia se hará a través de la plataforma TEAMS.





**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

**SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – JUSTICIA PENAL MILITAR – EJÉRCITO NACIONAL y a favor de JOHN EDWIN GARCÉS GARCÍA, quien obra a través de apoderado judicial, por los siguientes valores:

- Por concepto de perjuicios morales la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 57.442.351).
- Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 12.337.851).
- Por los intereses moratorios sobre los perjuicios morales la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 66.058.703,65).
- Por los intereses moratorios sobre los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 14.188.528,65).
- Por las costas del proceso, las cuales se liquidarán en la oportunidad procesal pertinente.

**TERCERO: ADVERTIR** que las sumas ordenadas en los numerales anteriores serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

**CUARTO: ORDENAR** a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **deberá cancelar las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

**QUINTO: NOTIFICAR** personalmente el presente proveído, la demanda y sus anexos a la entidad ejecutada **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – JUSTICIA PENAL MILITAR – EJÉRCITO NACIONAL**, al Ministerio Público<sup>31</sup> y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al correo electrónico dispuesto para recibir notificaciones judiciales, y por estado a la parte ejecutante.



REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

**SEXTO: RECONOCER** al abogado **JOSE EUSEBIO MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.750 y portador de la Tarjeta Profesional No. 132.018 del C.S.J, como apoderado de la parte ejecutante, en los términos del poder conferido<sup>33</sup>.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**  
Magistrada